

.....

Editorial

Violencias

Un misterioso espíritu se está posesionando de los pueblos que, bajo el nombre de libertad, tiende a disolver los lazos humanos y las ideas del bien común y la solidaridad. Para esa libertad sólo existen individuos, contrapuestos unos a otros, en competencia para satisfacer sus intereses, deseos e ideologías. Bajo la bandera de los nacionalismos se asesina. Con la consigna de la revolución o de la defensa del Estado y los intereses nacionales se masacran a miles de campesinos inocentes en Colombia. A la libertad de mercado y de empresa le tiene sin cuidado los efectos perversos que los movimientos financieros internacionales tienen sobre nuestras ruinosas economías y en consecuencia sobre la vida de cientos de miles de personas que son agresivamente excluidas de los más elementales niveles de bienestar. La creciente estructuración de la economía criminal, en donde están operando industrias millonarias para el tráfico y distribución de drogas, armas y objetos robados, interviene más en nuestros mercados internos generando modos de vida, usos y costumbres perversos.

Las sociedades nos estamos haciendo violentas porque estamos dejando de ser sociedades. Estamos renunciando a la idea de cuerpo social, en la que concebimos nuestra libertad y capacidad de acción en función del bien común y de la felicidad compartida. Para ello, nos socializamos desde niños con hábitos y costumbres que nos permiten integrarnos a una convivencia armónica y auto-

reprimimos todo aquello que resulta "antisocial".

Nos estamos negando el cielo en la tierra y, por el contrario, estamos construyendo nuestro propio infierno. De espaldas unos a otros, pueblos y personas, sólo volvemos las caras para hacer de los otros objetos del propio interés. La violencia proviene de esa fuerza invisible, impersonal, que nos lleva a ver en el otro sólo un recurso, una fuente para nuestra sobrevivencia o un obstáculo para nuestros deseos. Es una violencia que proviene de la falta de interés generoso. La humanidad es un compromiso, nadie es por sí mismo y nadie es fuera de los otros. La ayuda mutua ha sido la fuerza noble que nos permitió sobrevivir como especie.

La heterogeneidad y complejidad de las sociedades contemporáneas ha llevado a muchos analistas a descartar cualquier aspiración que pretenda proyectar o imaginar la idea de bien común. Si eso fuera cierto, tendríamos que decretar la muerte de la humanidad. Hay signos evidentes que contradicen esa ideología. Hoy más que nunca, existe una conciencia universal sobre ciertos tópicos que conforman los contenidos de la idea de bien común, aunque la práctica de nuestro mundo contemporáneo diste mucho de esa conciencia: la consagración de los derechos humanos y de la participación democrática, el respeto al equilibrio ecológico, el desarrollo sustentable, etc. Este horizonte compartido es el que nos permite pensar que el mundo que habitamos hoy no necesariamente está condenado al fraccionamiento.

Revertir las violencias que nos destruyen

Convertirnos de una sociedad violenta a una sociedad pacífica requiere reconstruirnos como sociedad integradora, sustituir la tendencia al empobrecimiento excluyente por la creación cada vez más generalizada de oportunidades de empleo, educación, vivienda, salud y participación democrática para las mayorías. Sin duda que ésta es la ecuación inicial que se debe despejar en un proceso progresivo de reingeniería social hacia la pacificación de nuestras relaciones sociales. Despegar de la violencia institucionalizada en nuestras estructuras económicas y sociales es el punto de partida para salir de la multiplicación de las violencias que nos destruyen.

Convertirnos en una sociedad pacífica requiere superar el flagelo de la anomia que crece día a día entre nosotros. La incapacidad del Estado para imponer un marco regulador en las transacciones sociales y la fragmentación de la sociedad ha provocado el vacío de normas que regularicen el comportamiento individual y colectivo. La superación de esta enfermedad social requiere que se vigoricen las fuerzas sociales integradoras que existen entre nosotros, en el Estado y en la sociedad, que operan a escala nacional, regional y local, que se expresa en instituciones y en personas. Articular esta fuerza social es precisamente crear la República, el hogar común de la sociedad.

Revertir nuestras violencias implica rediseñar la vida urbana en espacios de convivencia más humanizantes. La ciudad compendia la diversidad de una sociedad en todas sus esferas. Por eso el mundo urbano ha constituido siempre un escenario de conflictos. En el caso de América Latina, la conflictividad urbana se agudiza porque el crecimiento y desarrollo de nuestras ciudades ha dejado de contar con formas de control y planificación que aseguren la relación entre

bienestar urbano, crecimiento poblacional y control institucional de la convivencia. Muchas de nuestras grandes ciudades latinoamericanas se han convertido en amontonamientos atolondrados de edificaciones, vías, vehículos, transeúntes, vendedores ambulantes, mendigos, industrias, comercios, espectáculos, bares, prostíbulos, centros de distribución de drogas, monumentos, parques, etc. Todo ese conglomerado ha fraccionado la convivencia y los intereses colectivos; dando lugar a lo que algunos investigadores han llamado la "balcanización." de los espacios urbanos. Grupos contrapuestos unos a otros compitiendo por el mismo espacio de sobrevivencia. Sobre esta violencia, que se engendra desde la estructura misma de nuestras ciudades, se vinculan otras violencias: la violencia que surge de la cultura ambiental generalizada, la violencia estructural y la violencia institucional, la primera agrietando los viejos axiomas de la solidaridad, la segunda mediante la exclusión y la tercera bajo la forma de anarquía y anomia.

Una forma nueva de violencia que es necesario superar es la violencia familiar. La familia es sin duda la unidad que sustenta y cohesiona la vida social. Se convierte en un disolvente cuando opera como una célula infecciosa que produce e irradia violencia en todos los escenarios sociales. La idílica imagen del "hogar dulce hogar" está dando lugar, en sociedades violentas como la nuestra, a un escenario reproductor de violencia a través de las agresiones entre sus miembros, especialmente sobre niños y mujeres. Las múltiples agresiones que se producen con mayor frecuencia al interior de las familias actúa a su vez como una fuente de socialización permanente en las prácticas violentas. Todo ello requiere hacer brotar en la sociedad un esfuerzo generalizado por reconstruir nuevas representaciones sociales y modelos alternativos sobre la familia, las relaciones de pareja, las relaciones padres-hijos, etc.

La violencia del delito

Esta forma de violencia viene extendiéndose a una velocidad sin precedentes en el país desde comienzos de la década de los años 90. Se entiende generalmente por ella el uso o amenaza de uso de la fuerza física con la intención de afectar el patrimonio, lesionar o matar a otro. Esta violencia está íntimamente vinculada con las violencias anteriormente señaladas, sin embargo tiene sus características específicas que no se originan sólo como derivados de otros contextos explicativos.

Un multiplicador de la violencia delictiva es la alta probabilidad de ser perpetrada sin que medie sanción alguna para los responsables. La extensión de la impunidad tiene muchas causas. Como ya se ha dicho reiteradamente, la corrupción de los sistemas y procedimientos judiciales se ha convertido en un cáncer incurable. Esta corrupción se ha reforzado porque se ha entretejido una tupida red entre las instituciones judiciales y la empresa organizada del delito, que ha estructurado incluso procedimientos y métodos propios que coadyuvan a favor de la eficacia delictiva. Al mismo tiempo, las instituciones y procedimientos judiciales han quedado obsoletos para enfrentar la complejidad que tienen por delante. Sin recursos ni medios técnicos adecuados, la justicia es no sólo corrupta sino que cuando quiere actuar está imposibilitada de hacerlo. El otro eslabón son las policías y los cuerpos de seguridad; también estas instituciones han sido penetradas por diversas formas de corrupción, comprobándose su complicidad en un alto porcentaje de los delitos cometidos. También sufren de la ineficiencia e ineficacia del sistema judicial en su conjunto, especialmente en el área de investigación técnica. Las cárceles, el último eslabón de la cadena de justicia, también están colapsadas, penetradas hasta sus entrañas de corrupción y convertidas

en la máxima casa de educación para la violencia.

La certeza de la impunidad del delito aleja cada vez más al ciudadano de la práctica de la denuncia, no sólo porque probablemente será ineficaz, sino porque se percibe que con ella vendrán nuevos y peligrosos problemas. Al mismo tiempo, la impunidad de los organismos del Estado frente a la criminalidad y el delito obliga a la ciudadanía a crear distintas modalidades de protección y seguridad (tenencia de armas de fuego, proliferación de cuerpos privados de seguridad). Por último, la impunidad trae como consecuencia directa la imposición de la justicia por propia mano.

La violencia delictiva está asociada en gran medida al crecimiento del mercado de la droga en nuestras ciudades: disputas sobre territorios entre distribuidores rivales, asaltos y homicidios cometidos dentro de la jerarquía de distribución, como medios de imposición, robos a distribuidores y la retaliación violenta del distribuidor o jefe, eliminación de informantes, castigo por vender drogas adulteradas o falsas, castigo por no pagar deudas, etc... Todo esto sin mencionar la vinculación del mercado interno de distribución y consumo de drogas que opera en el país con su entorno internacional, en donde las redes del narcotráfico se han convertido en una de las más poderosas fuentes de múltiples violencias.

Las investigaciones sobre la violencia delictiva han logrado establecer una clara relación entre el alto índice de consumo de alcohol y homicidios. Esta relación se ha incrementado por el uso abusivo del expendio de licores sin ninguna reglamentación ni control por parte de las empresas productoras, del Estado y de la misma colectividad.

Ana María San Juan ha llamado la atención en sus investigaciones sobre un hecho reiterado al que nos hemos venido acostumbrando, especialmente en la ciudad de Caracas: "los muertos del fin de semana". "Es llamativo tan alto grado de ocurrencia justamente en los espacios destinados al descanso, al intercambio familiar, al esparcimiento y a la diversión...", lo que señala un importante grado de deterioro en los usos y costumbres de

nuevas representaciones sociales en el tratamiento del tiempo extraordinario y el deterioro de las relaciones cotidianas, cuyos conflictos se convierten en violencia agresiva en donde abunda la reunión social, el consumo de alcohol y drogas.

La violencia delictiva también se ha incrementado gracias al crecimiento del mercado de armas de fuego, que pone fácilmente en manos de la población civil la disponibilidad de su uso. Ese incremento se ha hecho por la vías lícitas, gracias a la demanda proveniente de la necesidad de autoprotegerse. Está comprobado por la observación común que las policías y cuerpos de seguridad actúan como agencias de distribución de armas decomisadas. A ese mercado concurren igualmente las mafias organizadas del delito con sus ofertas respectivas.

Con mucho dolor tenemos que admitir que, en el ámbito de la violencia delictiva sobresalen los jóvenes, de nuestros barrios, entre 15 y 24 años de edad como principales víctimas y victimarios. Es lamentable tener que concluir que entre ellos se está construyendo un universo mental que teje sus vidas y sus entornos, cercenando cualquier posibilidad de trascender hacia una mayor calidad de vida. Muchos jóvenes urbanos pobres encuentran en la violencia del delito la única posibilidad de afirmar su identidad, en un contexto social cuyo único modelo e ideal es ser consumidor a ultranza y que a la vez les excluye sistemáticamente. Ante la incertidumbre del futuro, probablemente provenientes de familias reproductoras de violencias, estos jóvenes responden a su situación optando decididamente por el mundo del delito y su lógica, resignándose además a su suerte. Para este numeroso grupo social, con escasas posibilidades de educación y empleo, desarraigado y con grandes carencias afectivas, la sociedad venezolana sólo tiene como respuesta la penalización y una mayor diferenciación.

¿Qué hacer?

Vemos con agrado los lineamientos del plan de seguridad ciudadana presentado por el Gobierno Nacional. Es

un plan que intenta abordar la violencia delictiva atendiendo a sus múltiples causalidades y expresiones. Son esperanzadores los planteamientos referentes al control y depuración de las policías y cuerpos de seguridad, el establecimiento de mecanismos ágiles para exigirles mayor eficiencia y la creación de comisiones de coordinación de las labores de policía e inteligencia. Es también alentador la concepción de una política de seguridad que tiene como principios rectores el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana, a través de la creación de canales expeditos para ello, y la prevención, entendida en un sentido amplio e integral. A esta política se suman los esfuerzos que se están haciendo en el área de la reforma judicial.

Los ciudadanos tendríamos que exigirle al Estado la instrumentalización de estas políticas, controlarlas y vigilarlas y, sobre todo, atendiendo a la complejidad de las violencias que nos azotan, imaginar y comprometernos en nuevas posibilidades y modelos de convivencia que actúen como fuerza contraria a la fuerza de las violencias que nos agreden.